

Observatorio Económico

N° 203 / Octubre 2025 / ISSN 0719-9597

Mercado Libre y el uso de nuevas tecnologías en el E-commerce: ¿qué consecuencias tiene para los trabajadores?



ACREDITADA / NIVEL AVANZADO
Hasta el 26 de junio 2030.

ÁREAS: Docencia y resultados del proceso de formación.
Gestión estratégica y recursos institucionales.
Aseguramiento interno de la calidad. Vinculación con el Medio. Investigación, creación y/o innovación.



Asimetrías en la extracción de agua subterránea: La tragedia de los comunes revisada



Día internacional de la pobreza: ¿cómo la evaluamos y medimos?



Asimetrías en la extracción de agua subterránea: La tragedia de los comunes revisada

Carlos J. Ponce, PhD en Economía, University of California, Los Ángeles. Académico Facultad de Economía y Negocios, UAH
y Eugenio S. A. Bobenrieth, Ph.D. Agricultural and Resource Economics, University of California, Berkeley. Director Magister en Economía, Facultad de Economía y Negocios, UAH.

Objetivo

Esta nota analiza la **tragedia de los comunes** asociada al uso del agua subterránea proveniente de un mismo acuífero -o de acuíferos que están conectados- por parte de múltiples agricultores. Con base en un documento de trabajo elaborado por los autores, se explora **cómo las asimetrías entre los usuarios pueden conducir a interpretaciones erróneas y a decisiones de política pública inadecuadas.**¹

La tragedia

El término tragedia de los comunes se refiere a una situación en la que varias personas utilizan un recurso compartido —como el agua, los pastizales, los peces o el aire—, pero cada una de ellas actúa de manera

independiente y racional buscando maximizar su beneficio individual. Al hacerlo, no internalizan cómo el deterioro del recurso causado por sus propias acciones afecta a los demás usuarios. El resultado colectivo es la sobreexplotación o el rápido deterioro del recurso, en perjuicio de todos los involucrados.

La idea fue introducida en 1968 por Garrett Hardin.² En su artículo seminal, el autor presenta como ejemplo un pastizal de libre acceso en el que cada ganadero lleva a pastar su propio rebaño. Al actuar de manera independiente y maximizar su propio bienestar individual, el número de animales que cada uno introduce en el pastizal excede el nivel socialmente óptimo y, de ese modo, surge la tragedia: en un mundo de recursos finitos, el resultado colectivo es la degradación del recurso y el rápido agotamiento del pastizal.



En el caso del agua subterránea, la tragedia de los comunes se manifiesta cuando múltiples agricultores extraen, al menos parcialmente, agua de una misma fuente —como un acuífero— de manera descoordinada y sin límites claramente definidos. Cada agricultor busca maximizar su propio beneficio aprovechando la mayor cantidad de agua posible, sin considerar que la disminución del nivel freático puede provocar el agotamiento o el secado de los pozos.

El escepticismo respecto de la posibilidad de una cooperación espontánea y voluntaria entre los usuarios para lograr un manejo eficiente del recurso llevó históricamente a la intervención centralizada de los órganos gubernamentales. El abanico de instrumentos que ofrece la ciencia económica para corregir este problema es amplio y abarca desde la creación de derechos de propiedad —como los mercados de agua implementados en Chile, Australia y algunos estados de Estados Unidos— hasta la regulación estatal mediante prioridades de uso, la gestión comunitaria y la aplicación de impuestos.

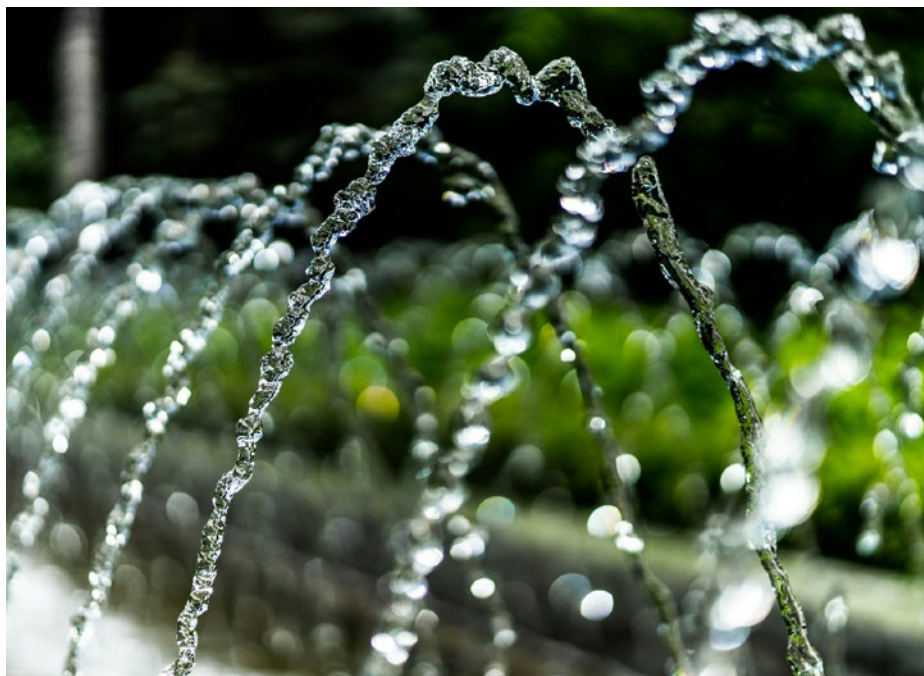
El problema de fondo con las reservas de agua subterránea radica en que sería deseable contar con instrumentos que logren su uso sostenible; pero, en contraste, a nivel

global se constata que muchos acuíferos están muy deteriorados debido a su sobreexplotación. El caso de California, EE.UU., nos permite ilustrar el problema. El año 2014 el estado de California aprobó nueva legislación, *Sustainable Groundwater Management Act*, *SGMA*, la cual obliga —en estado de régimen a partir del año 2040— a los agricultores usuarios de agua subterránea a formar agrupaciones de usuarios, quienes deben proponer sus planes de manejo al estado de California con foco en solucionar problemas asociados a la sobreexplotación de agua. Estos problemas incluyen la disminución crónica e insostenible de los niveles de agua subterránea, agotamiento de aguas superficiales conectadas con agua subterránea que generan beneficios ecológicos o ambientales, contaminación de agua subterránea con agua salada, degradación de la calidad del agua subterránea, y el hundimiento de terreno el cual puede sumar varios metros en las últimas décadas. La legislación de California no contempla ninguna distinción entre agricultores de diferente tamaño, sino que solamente obliga a que los agricultores en su conjunto ofrezcan planes realistas de extracción sostenible. Esto ha implicado que el esfuerzo de reducción de extracción de agua afecte negativamente el riego por parte de todos los agricultores involucrados

en esa zona geográfica, aunque es claro que *SGMA* afectará de manera diferente la rentabilidad de agricultores de tamaño diferente, implicando en algunos casos la pérdida casi total del valor de la tierra debido a futuras restricciones en la extracción de agua subterránea.

En algunos países se aplican impuestos a los agricultores que utilizan agua subterránea proveniente de acuíferos, aunque el uso de estas aguas resulta difícil de medir y fiscalizar. Estos impuestos buscan que los agricultores internalicen el costo asociado a la extracción excesiva de agua subterránea. Su aplicación varía según el país o la región: en algunos casos se grava la profundidad del pozo o la potencia de la bomba, mientras que en otros el monto depende de la ubicación geográfica, de modo que los agricultores que operan en zonas con acuíferos “sobreexplotados” pagan una tasa más alta.

Diversos casos prácticos ilustran la aplicación de estos principios. En España, los agricultores deben pagar un canon por el uso de agua subterránea cuando operan dentro de un sistema de concesiones. En los acuíferos declarados “sobreexplotados”, las Confederaciones Hidrográficas pueden restringir los volúmenes extraídos y aplicar tasas adicionales. En los Países Bajos existe un impuesto que obliga a las empresas que extraen agua subterránea a pagar un gravamen por metro cúbico, ya sea de forma anual o trimestral.³ En Francia se aplican cargos de extracción tanto para aguas superficiales como subterráneas.⁴ En el estado de Karnataka (India), el gobierno planea implementar un sistema de cobro por el uso de agua subterránea, según el volumen y la zona, además de exigir la instalación de medidores obligatorios.⁵ En algunas regiones, los gobiernos locales también han establecido impuestos específicos sobre la extracción subterránea: por ejemplo, en Yakarta (Indonesia) se grava este uso mediante un impuesto regional de carácter ambiental.⁶ En Bogotá, la normativa incorpora un componente denominado “costo de renovación del recurso” para determinar las tasas aplicables al uso de aguas subterráneas.⁷



La tragedia revisada a la luz de las asimetrías

Desde una perspectiva estrictamente económica, el problema esencial de los bienes comunes radica en que resulta costoso, o incluso imposible, excluir a los usuarios potenciales de recursos compartidos cuyos beneficios son temporalmente limitados. Los primeros análisis económicos formales se desarrollaron bajo supuestos de corto plazo, información completa y agentes idénticos.

En nuestra investigación analizamos formalmente un juego dinámico de extracción de agua subterránea con usuarios racionales y asimétricos. El modelo se basa en el desarrollado por Saak y Peterson (2007), en el cual dos agricultores interactúan extrayendo agua de un mismo acuífero.⁸ El marco incorpora la posibilidad de que el stock inicial de agua —o la facilidad de acceso a ella— difiera entre los jugadores. En particular, uno de los agricultores (el *jugador fuerte*)

dispone inicialmente de una mayor cantidad de agua, mientras que el otro (el *jugador débil*) enfrenta una posición menos favorable.

Esta aparente modificación “inocente” del modelo nos permite explorar un territorio conceptualmente inédito. La clave de nuestros resultados radica en que el jugador débil, al interactuar con el jugador fuerte, adopta un comportamiento racional pero muy conservador: al anticipar que su contraparte extraerá una cantidad considerable de agua, reduce su propia extracción más de lo que sería óptimo, con el fin de preservar parte del recurso para usos futuros. Es precisamente la interacción entre la asimetría inicial y la valoración del uso futuro del recurso la que determina el equilibrio del juego. En términos metafóricos, el jugador débil termina utilizando una cantidad menor de agua a la eficiente y conservando el recurso común más de lo que sería socialmente eficiente. La tragedia de los comunes, por tanto, se origina exclusivamente en el comportamiento del jugador fuerte, mientras que

el débil en realidad sub-explota el recurso. Una consecuencia adicional e inesperada del análisis es que, en muchos casos, el uso eficiente del recurso puede implicar que los agricultores débiles deberían agotar la parte que les corresponde del recurso.

A partir de estos resultados surge una pregunta natural: ¿qué políticas públicas podrían mejorar la situación? Nuestra investigación sugiere que algunas intervenciones pueden, por el contrario, empeorarla. En particular, la aplicación de impuestos uniformes —una medida adoptada en varios países, como se señaló anteriormente— constituye una política errónea que puede agravar la asignación ineficiente del recurso entre los usuarios. Desde una perspectiva de eficiencia, una alternativa más adecuada sería gravar únicamente al usuario fuerte o, de manera equivalente, subsidiar el uso del agua por parte del usuario débil.⁹ Estas políticas, sin embargo, no están exentas de dificultades: por un lado, podrían considerarse discriminatorias; y, por otro lado, como se mencionó, el monitoreo del uso de agua subterránea es un proceso complejo y costoso.

De nuestra investigación se desprende también una forma de regulación que podría conducir a un uso más eficiente del recurso. Para describirla, es necesario detallar brevemente algunos aspectos del modelo. En términos conceptuales, los agricultores deciden, en cada período, la cantidad de agua a extraer de manera simultánea. Dicho en términos más intuitivos, al momento de decidir cuánta agua extraer, cada agricultor desconoce la decisión del otro. Este supuesto, aunque irreal, constituye una aproximación analíticamente útil en numerosos contextos. Surge entonces una pregunta relevante: ¿qué ocurriría si el “Código de Aguas” estableciera un orden o prioridad en la extracción? Más precisamente, ¿qué efectos tendría una norma que otorgara prioridad de uso a uno de los agricultores?

Imaginemos que, en cada período de tiempo —por ejemplo, un año—, la regulación exigiera que uno de los agricultores decidiera

“

El problema de fondo con las reservas de agua subterránea radica en que sería deseable contar con instrumentos que logren su uso sostenible; pero, en contraste, a nivel global se constata que muchos acuíferos están muy deteriorados debido a su sobreexplotación”



primero cuánta agua extraer, y que el otro, tras conocer la decisión inicial, determinara posteriormente su propia extracción. A primera vista, esta política no parece difícil de implementar. Como el lector podrá anticipar, cuando el agricultor débil es quien decide en primer lugar, la eficiencia en el uso del recurso mejora de manera significativa.

Conclusiones

Por supuesto, nuestro trabajo no pretende abarcar ni examinar todas las posibles so-

luciones al problema. La evidencia empírica y experimental disponible muestra que, sin instituciones efectivas, es imposible alcanzar resultados más eficientes. Sin embargo, como enfatizan Ostrom y Gardner (1993), persiste el debate sobre los mecanismos más adecuados para resolver esta clase de dilemas.¹⁰ En particular, Elinor Ostrom —la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Economía— subraya que numerosos estudios demuestran la capacidad de las comunidades locales, y en especial de los propios agricultores, para crear, hacer cum-

plir y adaptar reglas efectivas de gestión de los recursos comunes. En otras palabras, Ostrom adopta una posición relativamente optimista —o quizás menos pesimista— respecto de la posibilidad de que la cooperación espontánea contribuya a superar ciertos aspectos del problema. Responder a la pregunta que plantea Ostrom constituye, en última instancia, el núcleo de nuestra agenda de investigación. **OE**



- (1) Eugenio Bobenrieth, Oscar Melo and Carlos Ponce (2025). The tragedy of the commons revisited: asymmetries in groundwater extraction. Documento de trabajo. Facultad de Economía y Negocios. Departamento de Economía, Universidad Alberto Hurtado.
- (2) Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. *Science*, 62, 43-248.
- (3) <https://business.gov.nl/regulation/groundwater-tax/>
- (4) https://en.wikipedia.org/wiki/Water_pricing?
- (5) <https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/karnataka-govt-to-levy-groundwater>
- (6) <https://faolex.fao.org/docs/pdf/ins48776.pdf?utm>
- (7) <https://www.ambientebogota.gov.co/normatividad-aguas-subterraneas?utm>
- (8) Saak, A. E., & Peterson, J. M. (2007). Groundwater use under incomplete information. *Journal of Environmental Economics and Management*, 54(2), 214-228.
- (9) Actualmente, estamos estudiando si el costo fiscal de tales medidas es o no el mismo.
- (10) Ostrom, E., & Gardner, R. (1993). Coping with asymmetries in the commons: self-governing irrigation systems can work. *Journal of economic perspectives*, 7(4), 93-112.



Mercado Libre y el uso de nuevas tecnologías en el E-commerce: ¿qué consecuencias tiene para los trabajadores?

*Maurizio Atzeni, Doctor en Industrial and Business Studies, Universidad de Warwick, Reino Unido.
Académico Facultad de Economía y Negocios, UAH
y Sonia Filipetto, Universidad General Sarmiento, Argentina.*



A las puertas de un supermercado en Santiago, la fila es cada vez más corta; al otro lado, en las bodegas de Mercado Libre, el movimiento no se detiene. El gigante del e-commerce latinoamericano avanza sobre el retail chileno con un modelo que combina velocidad de entrega, promociones y nuevas formas de pago, transformando el modo en que los chilenos compran. Con el objetivo de medir el impacto del canal digital en el comercio minorista, el Banco Central de Chile publica desde 2018 el Índice de Ventas Online del Comercio Minorista (IVOCM).

A lo largo de estos años, el indicador muestra que las plataformas de venta online son las que marcan el cambio que están

produciendo en el comercio electrónico: su serie es la más dinámica y de crecimiento sostenido, pasando de un nivel cercano a 80 en 2018 a superar los 500 puntos en 2025.

Si bien Amazon y Alibaba concentran el liderazgo global del comercio electrónico, en el Sur Global se consolidaron otros jugadores que siguieron trayectorias diferentes a estos modelos. Entre los ejemplos más destacados figuran Flipkart (India), Jumia (Nigeria) y Mercado Libre para América Latina. Estos modelos comparten ciertos rasgos en común: una notable capacidad para ajustarse a las peculiaridades del funcionamiento local de los mercados que involucra la creación de sistemas de pago móvil como así también el desarrollo de sistemas logis-

ticos adaptados a las particularidades de la región.

A modo de ejemplo puede observarse que en Estados Unidos Amazon pudo crecer con rapidez gracias a la extensa red del Servicio Postal (USPS) y a la consolidación de las tarjetas de crédito, en un entorno con altos niveles de confianza en los servicios financieros, una logística estandarizada y marcos legales sólidos que ofrecían garantías a los consumidores. Estas condiciones permitieron a la empresa enfocarse en la eficiencia de sus operaciones sin tanta necesidad de diseñar mecanismos de credibilidad tan estrictos en sus primeras etapas. En América Latina, en cambio, las plataformas de venta online no podían apoyarse en sistemas institucionales tan robustos y debieron crear sus propios métodos de entrega y de generación de confianza. En este contexto se desarrolló Mercado Libre, que enfrentó desafíos propios de la baja bancarización, la alta informalidad y la fragilidad de los marcos regulatorios. Para superar la reticencia de muchos usuarios a comprar y vender en un mercado virtual, la compañía implementó un sistema de reputación que premiaba a los vendedores con buen historial y a los compradores confiables, al tiempo que conformó un equipo de moderación encargado de revisar los foros de mensajes y evitar prácticas riesgosas, como el intercambio de información personal o el intento de concretar transacciones por fuera de la plataforma. De este modo, Mercado Libre tuvo que construir desde adentro las condiciones de credibilidad necesarias para expandirse en la región.

Hoy, en América Latina, Mercado Libre se consolida como la principal empresa de comercio electrónico comprendiendo operaciones en 18 países de la región. Nacida en 1999 como una plataforma de subastas al estilo de eBay, fue transformándose en un sistema de ventas, pagos y logística cada vez más integrado. Si bien una de las decisiones distintivas de Mercado Libre fue desarrollar su propia plataforma tecnológica para mantener control propietario sobre su

infraestructura digital (Barnett & Mekikian, 2013), este control no es absoluto. Como señalan Fernández Franco et al. (2024) la empresa depende en parte de Amazon Web Services (AWS) para sostener su operación, lo que relativiza esa autonomía tecnológica y expone una tensión entre la aspiración de independencia y la utilización de servicios de un competidor global.

MercadoLibre viene invirtiendo de manera intensiva en sus operaciones logísticas: desde centros de distribución estratégicos hasta alianzas con compañías aéreas lo que le ha permitido contener la competencia de Amazon en mercados clave como Brasil y México. Sin embargo, la competencia inter-capitalista es constante. Recientemente, Amazon adquirió una participación en Rappi, lo que la posiciona en competencia directa con Mercado Libre. El acuerdo permitirá a Rappi potenciar su infraestructura digital con los servicios de Amazon Web Services y fortalecer su logística de última milla, mientras que para Amazon significa profundizar en el ecosistema regional aprovechando la

red de la aplicación colombiana, fundada en 2015 y hoy presente en casi toda la región con servicios de entregas, supermercados, farmacia, viajes y finanzas. La operación se suma a vínculos previos entre ambas compañías, dado que Rappi ya era cliente de AWS y en México los usuarios de Amazon Prime cuentan con beneficios dentro de la aplicación.

En Chile, el avance de Mercado Libre no pasa inadvertido. El marketplace comenzó a funcionar en marzo de 2000, Mercado Pago fue lanzado en septiembre de 2007 y Mercado Envíos en febrero de 2016. El empleo en Mercado Libre Chile se ha multiplicado por 10 los últimos 5 años: pasó de 249 trabajadores en 2019 a 2.639 en 2024 (Mercado Libre, Inc., 2024). En 2024 Mercado Libre logró capturar un 14 % del mercado de e-commerce chileno, acercándose a Falabella, que tiene el 21% y Cencosud con un 15% (Bloomberg, 2025). No cabe duda de que los grandes retailers locales como Falabella y Cencosud, han reforzado sus canales digitales para competir con la propuesta de Mercado Libre. Sin embargo,

“

En 2024 Mercado Libre logró capturar un 14 % del mercado de e-commerce chileno, acercándose a Falabella, que tiene el 21% y Cencosud con un 15% (Bloomberg, 2025)”



la diferencia está en la flexibilidad: mientras los gigantes chilenos apuestan por integrar sus tiendas físicas con la experiencia online, Mercado Libre se apoya en vendedores independientes y pequeñas empresas. Esta dinámica también se relaciona con la fluidez y la velocidad con que la mercadería circula en los almacenes, apoyada en sistemas logísticos y de entregas urgentes cada vez más eficientes. En Chile, la importancia de este segmento se refleja en el reciente anuncio de un nuevo centro de distribución en Colina y la apertura de la primera bodega regional en Concepción, proyectos que sumarán más de 600 empleos.

Pero tratar al comercio electrónico como una mera tecnología novedosa, un modelo de negocio y un canal de mercado para sustituir a las tiendas físicas es solo una parte de la historia. El comercio electrónico ha sido un catalizador para la transformación socioeconómica en América Latina, con impactos que trascienden el mercado en línea. Sus dimensiones político-económicas se hacen visibles en su capacidad para actuar como constructor institucional allí donde el Estado es débil, como instrumento de política para impulsar determinadas agendas, como catalizador de cambios estructurales al reorganizar las relaciones entre Estado y empresas, como terreno de disputa en el que los gobiernos interactúan con las grandes plataformas y, en el plano laboral, como un nuevo campo de experimentación de viejas prácticas de organización y control del trabajo.

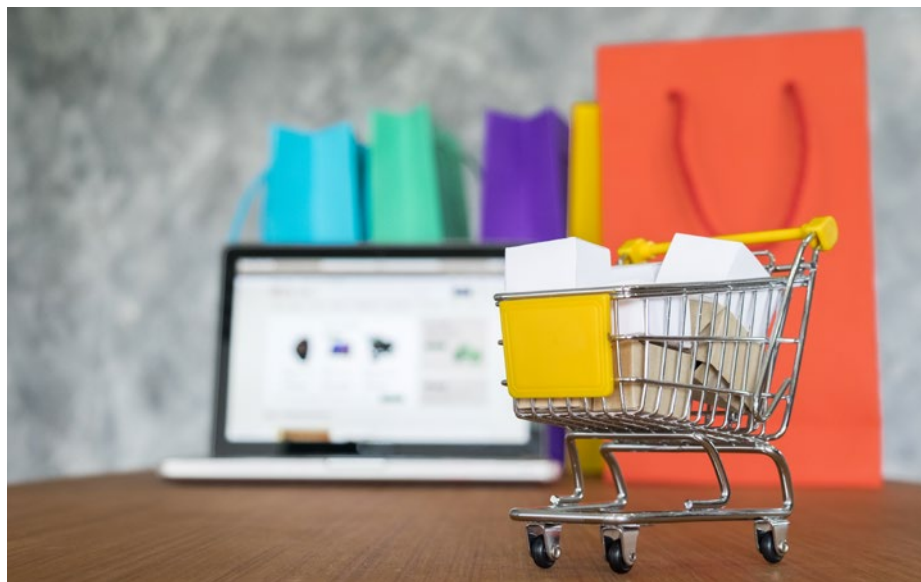
Comprar productos en MELI se está transformando en la cotidianeidad de cada uno de nosotros, cómo ir de compras al supermercado. Pero, de la misma manera que en los supermercados, los procesos de trabajo que existen detrás de las etiquetas y las marcas de los productos quedan invisibles al comprador. Esto es así, en particular, por lo que se refiere a cómo la implementación de tecnología afecta a los trabajadores. En los almacenes de MELI, así como de otros gigantes del e-commerce, los trabajadores mueven mercaderías de un estante al otro

de las instalaciones que componen estas 'fábricas de la logística', guiados por un algoritmo. Utilizando unos aparatos parecidos a los teléfonos inteligentes, los algoritmos asignan tareas de almacenaje a los trabajadores indicando la ubicación de los productos y los recorridos más adecuados en pos de aumentar la eficiencia y productividad de los trabajadores, que tienen que cumplir con índices de productividad que van cambiando según la demanda del momento (por ejemplo en el black friday o de noche). La combinación entre la asignación automatizada de tareas, la falta de discrecionalidad en la ejecución de estas, las pautas de elevada productividad y el control de cada paso y acción de los trabajadores, que el uso de aparatos portátiles hace posible, crean un contexto en el cual la tecnología permite aumentar la explotación del trabajo, con consecuencias directas en muchos casos sobre la salud de los trabajadores reportado por varios de ellos (Atzeni 2023). Los que investigan sobre el rol de las tecnologías digitales y de plataforma sobre el trabajo, ponen en evidencia en particular la dimensión de mayor control y vigilancia permitidas por el uso de las nuevas tecnologías. Estas, aparentemente, facilitarían también un cambio en las relaciones empresas/trabajadores, que serían gobernadas ahora por sistemas de gestión algorítmica. La digitalización y el registro de las diferentes fases del proceso productivo y la automatización de las tareas efectiva-

mente permiten un seguimiento individualizado y en tiempo real de la actividad de cada trabajador, modificando los métodos de control y vigilancia del trabajo. Sin embargo, los team leaders y supervisores, lejos de desaparecer, mantienen altos niveles de discrecionalidad, ejerciendo un mayor poder jerárquico, justamente gracias a los datos duros sobre índices de productividad que los procesos de digitalización permiten.

Un aspecto clave de la estrategia de gestión de la cadena de suministro de Mercado Libre ha sido su inversión en la construcción de una amplia red de entrega logística de última milla, basada en la subcontratación y caracterizada por altos niveles de precariedad. Los trabajadores logísticos de la última milla, incluidos repartidores y conductores temporales de paquetería, completan el paso final de la entrega de mercancías, garantizando que los paquetes lleguen a tiempo al domicilio del consumidor o a un punto de retiro en el barrio. El creciente poder de mercado de la plataforma en este segmento, a través de esquemas de tercerización como agencias, operadores asociados o programas de repartidores independientes, ha introducido nuevas dinámicas de explotación que afectan a miles de trabajadores.

En este proceso, en Chile, comercios de cercanía —almacenes, papelerías o ferreterías— se han convertido en centros de envío



y recepción de paquetes. Se reconocen fácilmente porque exhiben un cartel o sticker con el logo de Mercado Libre.

Al mismo tiempo, la entrega de paquetes es un caso emblemático de cómo la tecnología ha transformado la subcontratación laboral. Hace unas décadas, los repartidores no solían estar muy vigilados. Si bien los empleadores planificaban las rutas y hacían un seguimiento del tiempo, los repartidores dependían de incentivos económicos o tarifas a destajo y del conocimiento de la zona para garantizar la velocidad, así como de las quejas de los clientes para asegurar la calidad de su servicio. Hoy en día, la inteligencia artificial, las interfaces y aplicaciones en línea, y las tecnologías de comunicación y vigilancia han ampliado la capacidad de las empresas y los clientes para especificar, monitorear, dirigir y evaluar las tareas realizadas por los trabajadores.

El investigador estadounidense Jake Alimahomed-Wilson describe al conjunto de estos cambios bajo el concepto de “amazonización de la logística” (Alimahomed-Wilson, J., y Reese 2020), señalando que han transformado profundamente la organización del movimiento de bienes de consumo.

Aunque en América Latina aún queda mucho por explorar, en Estados Unidos se ha documentado que este modelo se consolidó junto con una mayor integración de tecnologías de vigilancia y control en tiempo real sobre los trabajadores. En conjunto, la “amazonización” de la logística ha debilitado los estándares laborales e incluso ha incrementado la presión competitiva sobre las empresas de paquetería sindicalizadas ya establecidas, obligándolas a ampliar sus servicios de entrega a los fines de semana.

A este contexto de explotación, creado por tecnologías algorítmicas que aumentan el control, los niveles de productividad, e individualizan la experiencia laboral, se suman normalmente estrategias de precarización y flexibilización del mercado laboral interno de la empresa, un uso instrumental de la regulación existente, y acuerdos con sindicatos pro-empresa. En el almacén de MELI en Argentina, por ejemplo, el 90 % de los trabajadores es contratado por una empresa multinacional de intermediación de trabajo, Randstad, por periodos muy cortos. Esto se debe no tanto a renunciadas voluntarias de los mismos trabajadores, agobiados por los ritmos de producción, sino, más bien, a una clara estrategia de la empresa, que

por un lado sirve a fomentar la competición constante entre trabajadores que buscan ser confirmados en el empleo cumpliendo a rajatabla con los niveles de productividad y con los pedidos de los supervisores, y por el otro, con el recambio constante de personal, desactiva desde el principio la posibilidad de un accionar colectivo por parte de los trabajadores. Esta estrategia empresarial es muchas veces acompañada por acuerdos con actores sindicales que fundamentalmente aceptan las prácticas flexibilizadoras de la empresa en pos de una generación de empleo, aunque limitada.

El caso de MELI, como el de otras empresas del e-commerce y de la economía de plataformas más en general representa en forma muy directa la aceleración que se está instalando en las dinámicas del capitalismo actual. Las tecnologías han permitido producir de forma casi inmediata la satisfacción de los deseos de consumos, inducidos por las dinámicas de mercado. Pero, a la vez, han hecho desaparecer una vez más el rol del trabajo humano en la producción y circulación de todas las mercaderías, transformando las relaciones sociales entre humanos en relaciones entre cosas, como Marx supo avisarnos tempranamente. **OE**

Referencias

- Alimahomed-Wilson, J., & Reese, E. (Eds.). (2020). *The cost of free shipping: Amazon in the global economy*. Pluto books.
- Atzeni, M. (2023). *The labour process and workers' rights at Mercado Libre: hiding exploitation through regulation in the digital economy*. *Work in the Global Economy*, 3(2), 181-200. <https://doi.org/10.1332/2732476Y2023000000003>
- Banco Central de Chile. (2025). Índice de Ventas Online del Comercio Minorista (IVOCM). <https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/indice-de-ventas-online-del-comercio-minorista-ivocm>
- Barnett, W., & Mekikian, G. (2013). Mercado Libre. *Stanford Graduate School Of Business*, 14.
- Bloomberg (17 junio 2025). Así creció el market share de MercadoLibre en Chile: cómo quedó frente a Falabella y Cencosud. <https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/chile/asi-crecio-el-market-share-de-mercadolibre-en-chile-como-queda-frente-a-falabella-y-cencosud/>
- Fernández Franco, S. F., Graña, J. M., & Rikap, C. (2024). Dependency in the Digital Age? The Experience of Mercado Libre in Latin America. *Development and Change*, 55(3), 429-464. <https://doi.org/10.1111/dech.12839>.
- MercadoLibre (2024) Annual Report. Securities and Exchange Commission. <https://investor.mercadolibre.com/sites/mercadolibre/files/mercadolibre/results/mercadoLibre-0424-sec-show.pdf>



Día internacional de la pobreza: ¿cómo la evaluamos y medimos?

Una reflexión a partir de la lectura de “Economics of Poverty” de Martin Ravallion (2016)

Bárbara Boggiano, Ph.D. Economics, University of Leicester, UK. Académica Facultad de Economía y Negocios, UAH.

Si bien el mundo ha avanzado en la lucha contra la pobreza en los dos últimos siglos, los estándares alcanzados no están garantizados. La desigualdad, elevada y creciente, ha paralizado el progreso en algunas partes del mundo donde observamos un aumento generalizado de la pobreza.

Analizando esos doscientos años con más detalle observamos que la cantidad absoluta de personas en el mundo que viven en la pobreza extrema no ha disminuido mucho. Aun así, la cifra representa una proporción mucho menor de la población mundial. En 1820, aproximadamente el 80% de la población vivía en condiciones materiales que parecen haber sido razonablemente similares a las del 20% más pobre de la actualidad.

Dicho progreso ha sido desigual a lo largo del tiempo y del espacio. La pobreza extre-

ma se ha concentrado en lo que hoy se denomina el *mundo en desarrollo*. Hasta donde se puede determinar a partir de los datos, la incidencia de la pobreza absoluta hace doscientos años en lo que es hoy el *mundo desarrollado* (a juzgar por una línea de pobreza que apunta a tener un poder adquisitivo constante) no era menor que en el mundo en desarrollo de hoy. Sin embargo, hoy en día casi nadie en el mundo desarrollado vive en la pobreza, tal como se define en el mundo en desarrollo.

Parece que casi todo el mundo tiene un concepto de pobreza, aunque algunos no vean discontinuidad alguna entre ser pobre y no serlo. En otras palabras, existe un nivel de ingresos único por encima del cual las personas de una sociedad y una época específicas tienden a pensar que no son pobres, pero por debajo del cual sí lo son. En este contexto, las líneas de pobreza tienen una



función tanto descriptiva como normativa. La primera tiene por objeto hacer comparaciones de la pobreza a lo largo del tiempo y del espacio, y la segunda tiene por objeto centrar la atención y la acción públicas en la situación de las personas pobres. Incluso antes de que existieran medidas de pobreza con fines descriptivos, hubo intentos de definir qué constituye un nivel de ingresos mínimo razonable para no ser considerado pobre en contextos de políticas específicas. De hecho, la idea básica de esa línea de pobreza es uno de los conceptos más antiguos de la economía aplicada, y se remonta al menos al siglo XVIII.¹

Sin embargo, las líneas de pobreza también presentan desafíos. En primer lugar, la preocupación por los juicios que se requieren para establecerlas o el *problema de referencia*. En este sentido, las líneas de pobreza no son fundamentalmente diferentes de muchas otras ideas de la economía aplicada. De hecho, la elección de un conjunto de bienes de referencia para establecer una línea de pobreza no es un juicio más intrínsecamente arbitrario que el de establecer el conjunto de bienes de referencia para el Índice de Precios al Consumidor (IPC). No obstante, muy pocos de los que rechazan la idea de una línea de pobreza por ser *arbitraria* también rechazarían el uso de un IPC por los mismos motivos. En términos más generales, tanto en teoría como en la práctica, toda medición del bienestar requiere un juicio sobre las características y los precios de referencia de los hogares para anclar esencialmente la regla de medición.

Un segundo desafío es hasta qué punto las líneas de pobreza deben respetar las *preferencias reveladas* de los propios pobres. Partiendo de la base de que las familias

pobres saben mejor cómo gastar sus escasos recursos, deberíamos centrarnos en las limitaciones de recursos globales a las que se enfrentan. En la práctica, esto significa que nos centramos en sus ingresos o gastos totales en lugar de en cuánto gastan (por ejemplo) en calorías. El mismo problema se plantea al analizar las líneas de pobreza. Si las personas pobres saben mejor como gastan sus limitados recursos, entonces queríamos que la composición de la canasta de consumo utilizada para construir la línea estuviera en consonancia con su preferencias y comportamiento. Este enfoque descarta lo que se puede denominar *líneas de pobreza*

breza persistiría inevitablemente, ya que evitar el hambre era el incentivo clave para realizar el trabajo necesario para el progreso económico. Esta forma de pensar la pobreza aún dejaba un papel para las políticas, que debían brindar cierto grado de protección contra los shocks, lo que ayudó a asegurar la estabilidad social después de una crisis.

En una segunda perspectiva, una más moderna, la pobreza no sólo se considera un mal social que puede evitarse mediante la acción pública, sino que hacerlo se considera perfectamente compatible con una economía en crecimiento. De hecho, se espera



Incluso antes de que existieran medidas de pobreza con fines descriptivos, hubo intentos de definir qué constituye un nivel de ingresos mínimo razonable para no ser considerado pobre en contextos de políticas específicas”

paternalistas. Este desafío cobra particular importancia cuando hay cambios en los precios. Una línea paternalista no garantiza que cuando las personas que se encuentran en la línea de pobreza ganen (pierdan) a causa de esos cambios de precios, el recuento de la pobreza disminuirá (aumentará). Esto se debe a que la línea paternalista no pone un peso en los precios que sea consistente con los pesos elegidos por las propias familias pobres.

En los últimos doscientos años, la literatura y los debates sobre políticas han experimentado una transición entre dos puntos de vista radicalmente diferentes sobre la pobreza. Al principio, había pocos motivos para pensar que los pobres tuvieran el potencial de ser algo más que pobres; la po-

que las políticas adecuadas contra la pobreza contribuyan a ese crecimiento eliminando las restricciones materiales a la libertad de las personas para perseguir sus intereses económicos. Es cierto que el compromiso de combatir la pobreza no es universal en la actualidad. Algunos todavía señalan las conductas de los pobres como causas de su pobreza. Las luchas distributivas continúan en todas partes. Los defensores de las políticas contra la pobreza a menudo se sienten frustrados por los reveses, y todavía queda mucho por hacer. Sin embargo, el progreso que se ha logrado tanto en el pensamiento como en la acción es innegable y las líneas de pobreza son una herramienta, aunque imperfecta, en la que evaluar dicho progreso. **OE**

(1) El sistema Speenhamland (o acuerdos de Speenhamland) fue un sistema asistencial creado en 1795 por los jueces y autoridades del distrito de Berkshire (Reino Unido), quienes se reunieron en Speenhamland para debatir cómo hacer frente a la hambruna que estaba padeciendo la población local como consecuencia de la inflación. Los magistrados descartaron la opción de establecer un salario mínimo para los trabajadores y en su lugar tomaron la decisión de crear un subsidio para los pobres. El subsidio estaba indexado sólo parcialmente al precio del pan. Al precio normal del pan, a un adulto soltero de sexo masculino se le aseguraba un ingreso mínimo que le permitía comprar tres barras de pan por semana. Por cada dependiente (esposa e hijos) se le aseguraba una barra y media extra. El sistema speenhamland tuvo como finalidad la de complementar las rentas de las familias jornaleras cuyos ingresos no eran suficientes para cubrir las necesidades básicas de alimentación lo que fue financiado con un impuesto negativo sobre la renta de los contribuyentes.

¡Mantengámonos conectados!



@fen.uah



@fen_uah



Facultad de Economía y Negocios - Universidad Alberto Hurtado



Facultad de Economía y Negocios - Universidad Alberto Hurtado



fen.uahurtado.cl



FEN UAH



¡Súmate a nuestro canal de difusión!

